



EL MINISTRO JORGE QUIROZ HA SIDO ENFÁTICO EN LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO ANTERIOR.

La “caja fiscal” abre discusión sobre déficit estructural y riesgos para la economía

ECONOMÍA. Economistas y expertos coinciden en que Chile no enfrenta insolencia, pero advierten un deterioro sostenido de las finanzas públicas.

Aldo Lingua
cronica@diarioatacama.cl

El debate sobre el estado de la denominada “caja fiscal” instalado por el gobierno ha generado una intensa discusión entre economistas y expertos, quienes coinciden en descartar un escenario de insolencia para Chile, pero advierten sobre un problema estructural que podría tensionar las finanzas públicas en el mediano plazo.

Mientras desde el Ejecutivo se ha planteado la existencia de restricciones relevantes de liquidez, distintas voces han matizado el diagnóstico, apuntando a una combinación de deterioro progresivo de las cuentas fiscales y una sobreinterpretación política del déficit.

Para el abogado con especialización en derecho económico, Christian Aste, el país no enfrenta una crisis de solvencia, pero sí un problema de fondo. “Chile no está insolvente: mantiene acceso a financiamiento, deuda moderada y credibilidad institucional. Sin embargo, enfrenta un deterioro estructural de sus cuentas fiscales, con déficit persistente, aumento del gasto rígido y menores ingresos estructurales, especialmente por el cobre”, dijo.

En esa línea, apuntó a responsabilidades en la administración anterior, encabezada por

Gabriel Boric, señalando que “no solo se equivocó completamente en las estimaciones, sino que además saturó el aparato público con cargos y funciones innecesarias”.

Por su parte, el académico del Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad de Atacama, Álvaro Vargas, enfatizó que el concepto de “caja fiscal” no ha sido tradicional en la discusión económica chilena. “Nuestro país presenta una de las mejores condiciones fiscales tanto dentro de la OCDE como en Latinoamérica”, explicó, aunque reconoció un deterioro progresivo en los últimos 15 años, en línea con una tendencia global.

DETERIORO Y Matices

Vargas planteó que el debate ha tenido un componente comunicacional relevante. “Ha existido una sobreinterpretación de la situación fiscal, al punto que el propio gobierno debió matizar posteriormente los conceptos utilizados en un inicio”, afirmó.

A su juicio, esto no resta importancia a la necesidad de abordar el tema con una mirada de largo plazo. “El gasto público tiende a incrementarse año a año, principalmente por el envejecimiento de la población, por lo que es fundamental debatir cómo se financiarán estas presiones en los próximos diez años de

manera responsable”, indicó.

Este diagnóstico es compartido parcialmente por Aste, quien sostuvo que la idea de una “caja vacía” se apoya en una tendencia real, aunque no implica un colapso inmediato. Ambos coinciden en que el desafío principal radica en corregir desequilibrios estructurales sin afectar la estabilidad económica.

En este contexto, también se han sumado referencias a expertos como José De Gregorio, quien ha señalado que la “caja” corresponde más bien a un aspecto operativo, que no debiese determinar por sí solo decisiones de política económica en un país con la trayectoria institucional de Chile.

RIESGOS

Respecto de las medidas para enfrentar el déficit, como recortes de gasto o alzas de precios, las opiniones apuntan a la necesidad de actuar con cautela. Aste consideró que estos ajustes son razonables, pero deben ser “graduales y bien calibrados” para evitar efectos negativos mayores.

“Si hay déficit persistente, es razonable contener el gasto y ajustar ingresos, pero en un ciclo económico débil los recortes bruscos o alzas agresivas pueden profundizar la desaceleración, reducir inversión y consumo y

afectar el empleo”, advirtió.

Vargas, en tanto, puso el foco en el impacto concreto que estas decisiones pueden tener en los hogares, especialmente en regiones como Atacama. Señaló que ya se proyectan alzas de precios en bienes básicos, como el pan y las frutas, con incrementos que podrían superar el 10% y 20% respectivamente.

“Mientras más alejadas están las regiones del centro del país, mayor es el impacto del costo de transporte, por lo que el alza de precios se sentirá de manera diferenciada a nivel territorial”, explicó.

Asimismo, alertó sobre efectos macroeconómicos en cadena. “Se proyecta un aumento cercano al 1% del IPC para abril, lo que implicará un incremento de la UF y, con ello, de los créditos hipotecarios. Esto generará un enfriamiento de la economía, que podría traducirse en una disminución del crecimiento del PIB en más de un punto porcentual durante este año”, indicó.

Ambos expertos coinciden en que el principal riesgo no es el déficit en sí, sino una respuesta desproporcionada. En un escenario de bajo dinamismo económico, advierten que decisiones apresuradas podrían agravar la desaceleración y afectar directamente el bienestar de la población. CS